

REPÚBLICA DE COLOMBIA



PROYECTO DE LEY No. DE 2008

“Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio”.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

DECRETA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

OBJETO, NATURALEZA Y COMPETENCIA.

ARTÍCULO 1.- OBJETO. La presente ley tiene por objeto determinar la naturaleza jurídica y el alcance de las funciones de Vigilancia, Inspección y Control que ejerce la Superintendencia de Puertos y Transporte en todo el territorio nacional a prestadores del servicio público de transporte y tránsito.

ARTÍCULO 2.- PRINCIPIOS. En el ejercicio de las funciones de Vigilancia, Inspección y Control las autoridades competentes garantizarán los principios del debido proceso, favorabilidad, presunción de inocencia, tipicidad, contradicción, legalidad y su trámite se adelantará con sujeción a los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política y a los contenidos en el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 3.- COMPETENCIA. La Superintendencia de Puertos y Transporte es la autoridad competente para ejercer las funciones de vigilancia, inspección y control en el territorio nacional a los prestadores de servicios públicos de transporte y tránsito, por tanto deberá determinar los parámetros generales, fijar los criterios, adoptar las directrices, indicadores, procesos y los procedimientos que se requieran para el ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección y control.

Para el ejercicio de las funciones descritas, la Superintendencia de Puertos y Transporte contará con un cuerpo especializado de agentes de control el cual estará integrado por miembros de la policía nacional u otras autoridades de la fuerza pública.

ARTÍCULO 4.- NATURALEZA Y ALCANCE. Las funciones de Vigilancia, Inspección y Control, a las que se refiere la presente ley, son de carácter administrativo preventivo y sancionatorio.

Los procesos de vigilancia, inspección y control que se ejercen sobre las personas prestadoras del servicio público de transporte y a aquellas que en general realizan actividades que las hacen sujetos de aplicación de la presente Ley están orientados a velar por el cumplimiento de los mandatos

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

constitucionales y legales a los que están sujetos, a tomar las medidas que garanticen el acceso de los usuarios al servicio y a imponer las respectivas sanciones a que haya lugar por su incumplimiento.

La vigilancia, inspección y control que se ejerce por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte a los sujetos vigilados es de carácter objetivo, sin perjuicio de poder examinar y comprobar operaciones de carácter contable, administrativo, financiero, jurídico, económico, aspectos administrativos, entre otros, que tengan que ver con la formación y funcionamiento del ente y que en una u otra forma lleguen a afectar la prestación del servicio.

La inspección, vigilancia y control relativa a la forma asociativa será de competencia de la superintendencia respectiva según la modalidad.

ARTÍCULO 5.- SUJETOS PASIVOS. Son sujetos de la vigilancia, inspección y control:

- 1) Los prestadores del servicio público de transporte de los modos terrestre automotor, fluvial, férreo, transporte por cable y los sistemas de transporte masivo.
- 2) Administradores de infraestructura de transporte, servicios conexos y complementarios a estos.
- 3) Importadores, ensambladores y fabricantes de chasis, carrocerías y vehículos destinados al servicio público de transporte.
- 4) Los operadores portuarios.
- 5) Las personas naturales o jurídicas que presten servicio público de transporte o servicios conexos o complementarios, sin contar con la respectiva habilitación, permiso o registro.
- 6) Los Alcaldes Metropolitanos, Distritales y Municipales.
- 7) Los Organismos de Tránsito.
- 8) Los Centros de Reconocimiento de Conductores.
- 9) Los Centros de Diagnóstico Automotor.
- 10) Los Centros de Enseñanza Automovilística.
- 11) Los prestadores de servicios privados de transporte que de acuerdo con la normatividad sean objeto de inspección, vigilancia y control.
- 12) Aquellas personas naturales o jurídicas que violen o faciliten la violación de las normas.
- 13) Los prestadores de servicios de transporte o tránsito que sean sujetos de aplicación de la presente ley.

La responsabilidad administrativa por las infracciones a las normas estará en cabeza del titular de la habilitación, permiso o registro, según las normas que rigen cada una de las actividades sujetas a la Vigilancia, Inspección y Control de que habla la presente Ley.

Cuando se trate de la prestación del servicio sin la respectiva habilitación, registro o permiso según el caso, la responsabilidad administrativa por la infracción corresponderá a la persona natural o jurídica que materialmente realice la actividad en nombre propio, la organice o asuma la correspondiente

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

responsabilidad. Así mismo será responsable todo aquel que colabore en la realización de dicha actividad.

PARÁGRAFO. Los requisitos e implementación de instrumentos contemplados para los vigilados no le serán aplicables a los alcaldes metropolitanos, distritales y municipales.

CAPÍTULO II

DE LA VIGILANCIA

ARTÍCULO 6.- FUNCIONES DE VIGILANCIA. En desarrollo de las funciones de vigilancia las autoridades competentes para tales efectos realizarán entre otras, las siguientes acciones:

- a) Instruir a los entes vigilados sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación;
- b) Fijar las reglas generales que deben seguir los entes vigilados en el flujo de información financiera y contable, sin perjuicio de la autonomía que ellos tienen para escoger y utilizar métodos accesorios; siempre que estos no se opongan, directa o indirectamente a las instrucciones generales impartidas por la Superintendencia;
- c) Velar por que los entes vigilados suministren a los usuarios la información necesaria para lograr mayor transparencia respecto a las condiciones de seguridad, tarifas, servicios, comodidad, accesibilidad, oportunidad, economía en la prestación del servicio;
- d) Dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten contra los entes vigilados, con el fin de establecer las responsabilidades del caso y tomar las respectivas medidas;
- e) Absolver las consultas que se formulen relativas a los entes sujetos a su vigilancia y decidir las solicitudes que presenten los particulares en ejercicio del derecho de petición de información;
- f) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que las rigen.

ARTÍCULO 7.- IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA. Con el propósito de desarrollar acciones de vigilancia por parte de las autoridades competentes para su ejercicio, los entes sujetos a la vigilancia, inspección y control de que trata la presente ley deben implementar herramientas como: I. control de gestión y resultados, II. Sistemas de información, III sistema de contabilidad.

ARTÍCULO 8.- DEL CONTROL DE GESTIÓN Y RESULTADOS. La vigilancia basada en el análisis del control de gestión y de resultados es un proceso que, dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean congruentes con las previsiones. Su propósito es hacer coincidir los objetivos de quienes prestan servicios públicos con sus fines y su mejoramiento estructural, de forma que se establezcan criterios claros que permitan evaluar sus resultados.

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

Para el efecto la Superintendencia de Puertos y Transporte definirá los criterios, características, indicadores y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las empresas. Así mismo, debe implementar los indicadores e instrumentos que permitan al ciudadano calificar la calidad del servicio en condiciones de comodidad seguridad, accesibilidad, oportunidad y adoptar los mecanismos y procedimientos que le garanticen al usuario el ejercicio de su derecho a presentar peticiones, quejas y recursos en pro de la protección de sus derechos..

ARTÍCULO 9.- PARTICIPACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA. La Superintendencia vigilará que se cumplan los criterios, evaluaciones, indicadores y modelos que para el efecto ésta defina y para lo cual podrá apoyarse en otras entidades oficiales o particulares.

Los sujetos obligados a implementar ésta medida podrán contratar con entidades privadas la definición y diseño de los procedimientos de control interno, así como la evaluación periódica de su cumplimiento, de acuerdo siempre a las reglas que establezca la Superintendencia de Puertos y Transporte.

ARTÍCULO 10.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN. El Gobierno Nacional en un término de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberá diseñar e implementar directamente o a través de terceros, un sistema de información en coordinación total, permanente y obligatoria con todos los sujetos vigilados que permita tener en línea y en tiempo real la información operativa, financiera y administrativa de las empresas prestadoras del servicio público de transporte y de aquellas que en general realizan actividades que las hacen sujetos de aplicación de la presente ley para garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la prestación de los servicios.

ARTÍCULO 11.- SISTEMA DE CONTABILIDAD.- Corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte en el término de un (1) año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley determinar dentro del sistema uniforme de contabilidad los datos específicos requeridos para efectuar el control y que deben reportar las personas prestadoras del servicio público de transporte y aquellas que en general realizan actividades que las hacen sujetos de aplicación de la presente ley, según el monto de sus activos y con sujeción siempre a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

CAPÍTULO III

DE LA INSPECCIÓN

ARTÍCULO 12.- FUNCIONES DE INSPECCIÓN. En desarrollo de estas funciones la Superintendencia de Puertos y Transporte y demás autoridades competentes para el efecto, tendrán las siguientes facultades:

- a) Practicar visitas, a las instalaciones o documentos de los vigilados, cuando exista evidencia atendible sobre el ejercicio *irregular* de la actividad, obtenida de oficio o suministrada por denuncia de parte, a los establecimientos oficinas o lugares donde operan personas naturales o jurídicas no sometidas a vigilancia de la Superintendencia y tomar las medidas necesarias en defensa de los intereses de los usuarios y prestadores del servicio legalmente habilitados;

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

- b) Practicar visitas de inspección a los entes vigilados con el fin de obtener un conocimiento integral de su situación financiera, operativa, administrativa, laboral y demás aspectos especiales que se requieran;
- c) Adelantar averiguaciones y obtener información probatoria que requiera de personas, instituciones o empresas ajenas al sector, siempre que resulten necesarias en el desarrollo de su función de vigilancia e inspección y se cumplan las formalidades legales;
- d) Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta clase de pruebas en el procedimiento civil, a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones de inspección e investigación.

En desarrollo de esta facultad podrá exigir la comparecencia, haciendo uso de las medidas coercitivas que se consagran para estos efectos en el Código de Procedimiento Civil y Código de Policía.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

ARTÍCULO 13.- FACULTADES DE PREVENCIÓN. La Superintendencia de Puertos y Transporte y demás autoridades competentes para ejercer las funciones de vigilancia, inspección y control tendrán las siguientes facultades de prevención:

- a) Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas, o se elimine el riesgo que afecte o pueda afectar la prestación del servicio al usuario y se adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento, cuando la autoridad competente considere que alguno de los entes sometidos a su vigilancia ha violado cualquiera de las disposiciones de obligatoria observancia;
- b) Orden de suspender de inmediato todas o algunas de las actividades y cierre de los inmuebles utilizados para su desarrollo.
- c) Imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en el artículo siguiente a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de los entes vigilados sin contar con la debida autorización;
- d) Suspendar preventivamente el funcionamiento de aquellos entes vigilados que para su habilitación, permiso o registro debieron obtener certificado de conformidad, cuando el organismo de certificación o de acreditación en sus auditorias de seguimiento o de control encuentren no conformidades mayores en el cumplimiento de las condiciones y requisitos bajo las cuales se concedió la certificación o acreditación y recomienden la suspensión preventiva del certificado de conformidad, hasta tanto se corrijan las no conformidades.
- e) Intervenir administrativamente al ente vigilado cuando existan serios motivos que pongan en riesgo la prestación del servicio.

ARTÍCULO 14.- MEDIDAS CAUTELARES EN CASO DE ACTIVIDADES IRREGULARES. Corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte y

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

demás autoridades de acuerdo a su jurisdicción y competencia, imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de los entes vigilados sin contar con la debida autorización:

- a) La suspensión inmediata de tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por un valor equivalente a diez (10) SMMLV cada una;
- b) Inmovilización o retención de equipos destinados a la realización de actividades exclusivas de los entes vigilados, sin la debida autorización y,
- c) Informar a la autoridad competente para que proceda a la disolución de la persona jurídica.

ARTÍCULO 15.- MEDIDAS CAUTELARES EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO. La Superintendencia de Puertos y Transporte impondrá las siguientes medidas cautelares, cuando uno de los vehículos de una empresa prestadora del servicio público de transporte DE PASAJEROS de cualquier modalidad se vea involucrado en un accidente de tránsito con pérdida de vidas humanas y los informes técnicos preliminares levantados por las autoridades de control operativo, determinen claros indicios de la responsabilidad de la empresa de transporte derivada de la imprudencia o impericia del conductor del vehículo de servicio público, o del mal estado mecánico del mismo:

- a) Ordenará la revisión progresiva de todo el parque automotor de la empresa en el Centro de Diagnóstico Automotor que indique la Superintendencia;
- b) Realización del examen de idoneidad de todos los conductores de la empresa, en el Centro de Reconocimiento de Conductores que indique la Superintendencia de Puertos y Transporte.

ARTÍCULO 16.- OTRAS MEDIDAS CAUTELARES: La Superintendencia de Puertos y Transporte y demás autoridades competentes, a través de las autoridades que ejercen el control operativo en vía, podrán ordenar la inmovilización o retención de los equipos cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar:

- a) Cuando se compruebe que el equipo no cumple con las condiciones de homologación establecidas por la autoridad competente;
- b) Cuando se trate de equipos al servicio de empresas de transporte cuya habilitación y permiso de operación, licencia, registro o matrícula se les haya suspendido o cancelado;
- c) Cuando se compruebe la inexistencia o alteración de los documentos que sustentan la operación del equipo y sólo por el tiempo requerido para clarificar los hechos;
- d) Por orden de autoridad judicial;
- e) Cuando se compruebe que el equipo no reúne las condiciones técnico-mecánicas requeridas para su operación, o se compruebe que presta un servicio no autorizado. En éste último caso el

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

vehículo será inmovilizado hasta por un término de seis (6) meses;

- f) Cuando se compruebe que el equipo excede los límites de dimensiones, peso y carga permitidos;
- g) Cuando se detecte que el equipo es utilizado para el transporte de mercancías presuntamente de contrabando, debiendo devolverse una vez que las mercancías se coloquen a disposición de la autoridad competente, a menos que exista orden judicial en contrario;
- h) Cuando se detecte que el equipo es utilizado para el transporte irregular de narcóticos o de sus componentes, caso en el cual deberá ponerse a disposición de la autoridad competente en forma inmediata, quien decidirá sobre su devolución;
- i) En los demás casos establecidos expresamente por las disposiciones legales.

ARTÍCULO 17.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS. Para llevar a cabo la inmovilización de vehículos, la autoridad competente, ordenará detener la marcha del vehículo y librará al conductor copia del informe que da origen a la medida.

Los vehículos inmovilizados o retenidos serán llevados a patios oficiales, talleres o parqueaderos autorizados por las autoridades de tránsito y transporte bajo su responsabilidad, para lo cual la autoridad competente notificará del hecho al propietario o administrador del respectivo taller o parqueadero.

La inmovilización terminará con la orden de entrega del vehículo al propietario, tenedor o infractor por parte de la autoridad competente, la cual se expedirá una vez cesen las causas que dieron origen a su inmovilización o retención. Lo anterior sin perjuicio de la imposición de las demás sanciones a que haya lugar

ARTÍCULO 18.- DE LAS AUDITORIAS.- Para el cumplimiento de las funciones de Inspección y vigilancia, la Superintendencia de Puertos y Transporte podrá celebrar contratos y convenios para la realización de auditorias con firmas especializadas de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Contratación Pública y sus normas reglamentarias.

TÍTULO II

DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO

CAPÍTULO I

SANCIONES Y CRITERIOS DE GRADUALIDAD

ARTÍCULO 19.- SANCIONES: Las autoridades competentes impondrán las siguientes sanciones a quienes infrinjan las normas a las que deben estar sujetos, según la naturaleza y gravedad de la infracción:

1. Amonestación
2. Multa.
3. Suspensión de la habilitación, permiso o registro.

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

4. Cancelación de habilitación, permiso o registro.
5. Solicitud a las autoridades para que decreten la caducidad de los contratos que haya celebrado el infractor, cuando el régimen de tales contratos lo permita.
6. Solicitar la resolución de los contratos privados e intervenir en la formulación de las condiciones contractuales de estos.

ARTÍCULO 20.- CRITERIOS PARA GRADUAR LA SANCIÓN. Para determinar la sanción que se deberá imponer se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- a) La dimensión del daño o puesta en peligro a los intereses jurídicos tutelados;
- b) El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la comisión de la infracción;
- c) La reincidencia en la comisión de la infracción;
- d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión de la autoridad competente;
- e) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción, o cuando se utiliza persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos;
- f) El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes;
- g) La renuencia o desacato a cumplir con las órdenes impartidas por la autoridad competente;
- h) Las modalidades y circunstancias en que se realizó la infracción;
- i) El procurar resarcir el daño o compensar el perjuicio causado.

ARTÍCULO 21.- DE LA SANCIÓN A IMPONERSE. Analizados los criterios de gradualidad descritos en el artículo precedente, el juzgador determinará la sanción a imponer, entendiéndose que la sanción de amonestación se aplicará para las infracciones más leves y la sanción de cancelación de habilitación, permiso o registro se aplicará a aquellas infracciones calificadas como gravísimas. Entiéndase cada una de estas sanciones así:

Amonestación. Es la exigencia perentoria que por escrito realiza la autoridad competente al sujeto para que adopte las medidas tendientes a superar la alteración en la prestación del servicio o la inobservancia de la norma que ha generado su conducta.

Multa. Es la consecuencia pecuniaria que se le impone a un sujeto de sanción por haber incurrido en una infracción.

Suspensión de la habilitación, permiso o registro. Es la cesación temporal de los efectos jurídicos del acto administrativo que concedió la respectiva habilitación, permiso o registro.

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

Cancelación de habilitación, permiso o registro. Es la cesación definitiva de los efectos jurídicos del acto administrativo que concedió la respectiva habilitación, permiso o registro.

Las sanciones descritas en los numerales 5 y 6 proceden cuando el régimen contractual así lo permita y cuando se consagren en los contratos circunstancias lesivas para una de las partes.

CAPÍTULO II

SANCIONES DE MULTA APLICABLES A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE LOS MODOS TERRESTRE AUTOMOTOR, FLUVIAL, FÉRREO, POR CABLE Y MASIVO.

ARTÍCULO 22.- SANCIÓN DE MULTA. Los prestadores del servicio público de transporte de los modos: terrestre automotor, fluvial, férreo, por cable y masivo, pagarán multas liquidadas en SMDLV, así:

A. Serán sancionados con multas equivalentes a cien (100) salarios mínimos DIARIOS legales vigentes, los prestadores del servicio público de transporte enunciados en este artículo que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. dar trato irrespetuoso a los usuarios.
2. No suministrar a los usuarios información sobre los servicios ofrecidos, tarifas, horarios, etc.
3. Prestar el servicio público de transporte sin portar los documentos que reglamentariamente se estipulen para sustentar la operación de los equipos o la prestación del servicio.
4. No suministrar la información que legalmente le sea solicitada por autoridad competente.
5. No mantener vinculado el personal que labora en la empresa a la seguridad social e incumplir con los deberes y obligaciones determinados legalmente, entre los que se cita, permitir exceder las jornadas laborales.

B. Serán sancionados con multas equivalentes a trescientos (300) salarios mínimos DIARIOS legales vigentes, los prestadores del servicio público de transporte enunciados en este artículo que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. Cobrar tarifas –fletes, pasajes- por la prestación del servicio por fuera de los límites establecidos;
2. Obstaculizar la actuación de las autoridades de vigilancia e inspección para impedir el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas.
3. Prestar el servicio de transporte sin atender las condiciones particulares para la operación y que para cada clase de servicio se ha determinado en la respectiva normatividad.

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

4. Prestar el servicio de transporte excediendo la capacidad autorizada en número de pasajeros, toneladas o la autorizada a la empresa.
5. No mantener las condiciones que dieron origen a la habilitación, permiso o registro.
6. Prestar servicios en rutas, horarios, corredores de servicios de transporte, zonas de operación, frecuencias, radios de acción, niveles de servicio y modalidades, sin contar con la autorización correspondiente.
7. No tener la totalidad de los vehículos de transporte de pasajeros asegurados en las condiciones establecidas en las disposiciones que los rigen para cada modalidad.
8. No disponer de los mecanismos necesarios para ofrecer y garantizar en forma óptima la atención al usuario en sus peticiones, quejas y reclamos.
9. No asumir una actitud diligente en caso de una emergencia o incidente, que busque contrarrestar las causas que la originaron, reducir los riesgos o reestablecer la normalidad.
10. Prestar el servicio de transporte en vehículos sin contar con los equipos para la atención de emergencias, dispositivos de seguridad, distintivos y demás elementos requeridos en las diferentes normas legales y reglamentarias establecidas para cada caso.

C. Serán sancionados con multas equivalentes a quinientos (500) salarios mínimos DIARIOS legales vigentes, los prestadores del servicio público de transporte enunciados en este artículo que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. No impartir e implementar programas de capacitación y entrenamiento al personal y conductores, conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes sobre la materia.
2. No verificar que el vehículo y la unidad de transporte antes de iniciar el recorrido, estén en condiciones óptimas de operación.
3. Prestar el servicio con equipos que no cumplan las disposiciones técnicas de homologación, o que habiendo sido homologado se le cambien las características.
4. Realizar acciones de poder dominante frente a los propietarios de los vehículos vinculados a las empresas y suscribir contratos contemplando circunstancias manifiestamente desventajosas para los intereses jurídicos y patrimoniales de los propietarios de los vehículos.
5. Transportar pasajeros en condiciones que ponga en peligro su integridad física por obstaculizar las puertas de ascenso y descenso de los pasajeros y las salidas de emergencia, transportar pasajeros en los estribos, escaleras exteriores, techos o parrillas y en los compartimentos destinados a la carga.
6. Despachar vehículos conducidos por personas no idóneas, embriagadas o bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

7. Las demás conductas que constituyan infracciones a las normas que las rigen.

CAPÍTULO III

SANCIONES DE MULTA APLICABLES A LOS ADMINISTRADORES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, SERVICIOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS AL TRANSPORTE.

ARTÍCULO 23. DE LA SANCIÓN DE MULTA. Los administradores de infraestructura de transporte, prestadores de servicios conexos y complementarios al transporte, que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones serán sancionados con multas liquidadas en SMDLV, así:

A. Serán sancionados con multas equivalentes a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes enunciados en este artículo los administradores de infraestructura de transporte, prestadores de servicios conexos y complementarios al transporte, que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. No disponer de los mecanismos necesarios para ofrecer y garantizar en forma óptima la atención al usuario en sus peticiones, quejas y reclamos.
2. No suministrar a los usuarios información sobre los servicios ofrecidos, tarifas, horarios de atención, entre otras.
3. Obstaculizar al interior de la terminal, el desempeño de las funciones a las autoridades de transporte y tránsito y a las autoridades que ejercen la vigilancia, inspección y control de la operación en general de la actividad transportadora.
4. No librar oportunamente el documento que acredita el pago de la tasa de uso al vehículo despachado desde la terminal de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera y demás documentos que en desarrollo de sus funciones deba expedir.
5. Permitir la realización de actividades prohibidas que afecten los principios de equidad, libre acceso oportunidad, calidad y seguridad que deben aplicarse en el desarrollo de las funciones.

B. Serán sancionados con multas equivalentes a trescientos (300) salarios mínimos diarios legales vigentes los administradores de infraestructura de transporte, prestadores de servicios conexos y complementarios al transporte, que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. No mantener las condiciones que dieron origen a la habilitación, permiso de operación, licencia u otorgamiento del contrato de concesión.
2. Permitir la operación de la infraestructura de transporte, servicios conexos y complementarios sin atender los criterios y condiciones determinados por las normas que los rigen;
3. No prestar los servicios propios de la infraestructura, servicios conexos y complementarios relacionados con la actividad transportadora, en condiciones de equidad, libre acceso, oportunidad, calidad y seguridad.

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

4. No elaborar y aplicar su propio manual operativo o reglamento técnico de operaciones de conformidad con las disposiciones vigentes o las que se expidan para tal fin.
5. Permitir el despacho de medios de transporte que no están habilitados o que cubren rutas no autorizadas o registradas ante el Ministerio de Transporte.
6. No suministrar al Ministerio de Transporte o a la autoridad competente de ejercer vigilancia, inspección y control de manera oportuna la información de acuerdo con los formatos, plazos y medios que se establezca.
7. Realizar cobros operacionales y no operacionales sin atender los parámetros y decisiones adoptadas por el Ministerio de Transporte.
8. Las demás que constituyan violación a las normas que las rigen.

CAPÍTULO IV

SANCION DE MULTA APLICABLE A LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO

ARTÍCULO 24. DE LA SANCIÓN DE MULTA. Los organismos de tránsito, pagarán multas liquidadas en smdlv, así:

A. serán sancionados con multas equivalentes a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes, los organismos de tránsito que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. Omitir, retardar o denegar en forma injustificada a los usuarios, la prestación de los servicios a los que están obligados por ley.
2. No suministrar a los usuarios información sobre los servicios ofrecidos, tarifas, horarios de atención, entre otras.
3. Excederse en las funciones o no llevar a cabo el procedimiento reglamentado.
4. Hacer caso omiso a las instrucciones impartidas por el Ministerio de Transporte u otra autoridad competente.
5. Impedir u obstaculizar las acciones de las autoridades que ejercen la vigilancia, inspección y control.
6. No atender la formulación e implementación de planes de seguridad vial y movilidad cuando le sea atribuida esta función.
7. Ejercer funciones dentro del ámbito de jurisdicción de otro organismo de tránsito.
8. No disponer de los mecanismos necesarios para ofrecer y garantizar en forma óptima la atención al usuario en sus peticiones, quejas y recursos.

B. Serán sancionados con multas equivalentes a trescientos (300) salarios mínimos DIARIOS legales vigentes, los organismos de tránsito que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

1. No mantener las condiciones técnicas o administrativas, que dieron origen a su funcionamiento.
2. No regular el flujo de tránsito, ni cumplir con la responsabilidad de colocar y mantener las señales de tránsito cuando le ha sido atribuida ésta función.
3. No generar e ingresar en línea la información de cada uno de los registros que integran el Registro Único Nacional de Tránsito de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin.
4. No hacer adecuado uso del código de acceso a la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT
5. Expedir especies venales sin el lleno de los requisitos establecidos por acto administrativo.
6. Registrar vehículos automotores o alimentar otros registros que son de su competencia sin agotar previamente la verificación de la información.
7. Utilizar y expedir especies venales con rangos o series no asignadas.
8. Las demás conductas que constituyen violación a las normas que los regulan

CAPÍTULO V

SANCIONES DE MULTA APLICABLES A LOS CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES

ARTÍCULO 25.- DE LA SANCIÓN DE MULTA. Los centros de reconocimiento de conductores pagarán multas liquidadas en smdlv, así:

A. Serán sancionados con multas equivalentes a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes, los centros de reconocimiento de conductores que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. No informar al Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes las modificaciones que se presenten respecto a la información acreditada para obtener su registro.
2. Obstaculizar la actuación de las autoridades de vigilancia, inspección y control para impedir el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas.
3. No disponer de los mecanismos necesarios para ofrecer y garantizar en forma óptima la atención al usuario en sus peticiones, quejas y reclamos.

B. Serán sancionados con multas equivalentes a trescientos (300) salarios mínimos diarios legales vigentes, los centros de reconocimiento de conductores que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. Expedir Certificados de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz, sin haber realizado la evaluación de acuerdo a los parámetros establecidos para tal fin.

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

2. Expedir las Certificaciones sin atender los procedimientos establecidos y sin utilizar los formatos adoptados para el efecto.
3. Certificar la idoneidad de un conductor, habiendo reprobado las pruebas practicadas.
4. No almacenar y custodiar la información relativa a los usuarios atendidos y Certificados de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz que expida el CRC y demás informes de las evaluaciones efectuadas en el Centro, de acuerdo con los parámetros que para el efecto establezca la normatividad que los rige.
5. No reportar la información en la oportunidad y condiciones establecidas al Registro Único Nacional de Tránsito.
6. Las demás conductas que constituyan violación a las normas que los rigen.

CAPÍTULO VI

SANCIONES DE MULTA APLICABLE A LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

ARTÍCULO 26.- DE LA SANCIÓN DE MULTA. Los centros de diagnóstico automotor pagarán multas liquidadas en smdlv, así:

A. Serán sancionados con multas equivalentes a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes, los centros de diagnóstico automotor que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. No disponer de los mecanismos necesarios para ofrecer y garantizar en forma óptima la atención al usuario en sus peticiones, quejas y reclamos.
2. No informar al Ministerio de Transporte y a las autoridades competentes las modificaciones que efectúe el Centro de Diagnóstico Automotor con respecto a la información acreditada para obtener su habilitación.
3. Obstaculizar la actuación de las autoridades de vigilancia, inspección y control y demás autoridades competentes para impedir el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas.

B. Serán sancionados con multas equivalentes a trescientos (300) salarios mínimos diarios legales vigentes, los centros de diagnóstico automotor que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

4. Expedir Certificados de la revisión técnico mecánica y de gases sin haber agotado el procedimiento y las pruebas exigidas en las normas respectivas.
5. Calificar los resultados sin atender los parámetros de la revisión técnico-mecánica y de gases establecidos en la normatividad que los rige.
6. No almacenar y custodiar la información tal como lo establecen las normas que los rigen.

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

7. No reportar por medios electrónicos en línea y tiempo real las revisiones efectuadas a todos los vehículos con las características y en la oportunidad exigida en las normas respectivas.
8. No hacer adecuado uso del código de acceso a la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT.
9. No reportar por escrito ante las autoridades competentes las inconsistencias que se presenten entre la información documental del vehículo frente a la confrontación física del mismo.
10. Las demás conductas que constituyan violación a las normas que los rigen.

CAPÍTULO VII

SANCIONES DE MULTA APLICABLES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

ARTÍCULO 27.- DE LA SANCION DE MULTA. Los centros de enseñanza automovilística pagarán multas liquidadas en smdlv, así:

A. serán sancionados con multas equivalentes a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes, los centros de enseñanza automovilística que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. No comunicar al Ministerio de Transporte sobre las modificaciones que se presenten respecto a la información suministrada para la habilitación de funcionamiento del Centro de Enseñanza Automovilística.
2. Negarse a proporcionar información y/o obstaculizar la labor de auditoria o de control.
3. No reportar por medios electrónicos en línea y tiempo real los cursos de capacitación efectuados a todos los alumnos en las condiciones y oportunidad exigidas en las normas respectivas.
4. Suministrar información que no corresponde a la realidad a los Ministerios de Transporte y/o de Educación.
5. No disponer de los mecanismos necesarios para ofrecer y garantizar en forma óptima la atención al usuario en sus peticiones, quejas y reclamos.

B. serán sancionados con multas equivalentes a trescientos (300) salarios mínimos diarios legales vigentes, los centros de enseñanza automovilística que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. No cumplir en su totalidad con los programas de instrucción, requisitos e intensidad horaria establecidos en la normatividad vigente.
2. No llevar los archivos de los alumnos debidamente matriculados, capacitados y certificados.
3. Impartir la enseñanza en vehículos no autorizados al Centro de Enseñanza Automovilística sin las condiciones de seguridad.

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

4. Impartir la enseñanza en vehículos sin las adaptaciones respectivas o en una clase de vehículo de categoría distinta a la categoría de la licencia que se pretende obtener.
5. Impartir enseñanza teórica sin el cumplimiento de los requisitos que para tal fin han sido determinados respecto a las instalaciones, materiales didácticos e idoneidad de los instructores.
6. Certificar la idoneidad de un conductor o instructor sin el cumplimiento de los requisitos determinados para tal fin.
7. No hacer adecuado uso del código de acceso a la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT.
8. Las demás actuaciones que constituyan violación a las normas que las rigen.

CAPÍTULO VIII

SANCIONES DE MULTA APLICABLE A IMPORTADORES, ENSAMBLADORES Y FABRICANTES DE CHASIS, CARROCERÍAS Y VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 28.- DE LA SANCIÓN DE MULTA. Los importadores, ensambladores y fabricantes de chasis, carrocerías y vehículos destinados al servicio público de transporte pagarán multas liquidadas en smdlv, así:

A. Serán sancionados con multas equivalentes a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes, las personas naturales o jurídicas que tengan por objeto la importación, fabricación o ensamble de vehículos automotores, chasis, carrocerías, remolques y semiremolques que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. Negarse a proporcionar información y/o obstaculizar la labor de auditoria o de control a las autoridades competentes;
2. No disponer de los mecanismos necesarios para ofrecer y garantizar en forma óptima la atención al usuario en sus peticiones, quejas y reclamos;
3. Negarse a proporcionar información y/o obstaculizar la labor de auditoria o de control.

B. Serán sancionados con multas equivalentes a trescientos (300) salarios mínimos DIARIOS legales vigentes, Las personas naturales o jurídicas que tengan por objeto la importación, fabricación o ensamble de vehículos automotores, chasis, carrocerías, remolques y semiremolques que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. Vulnerar o facilitar la violación de las disposiciones establecidas para la aprobación de las homologaciones de los vehículos automotores, carrocerías, chasis, remolques o semiremolques;
2. Realizar la actividad sin estar debidamente inscrito ante el Ministerio de Transporte;

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

3. Comercializar vehículos con características y especificaciones diferentes a las determinadas en la ficha de homologación;
4. No reportar por medios electrónicos en línea y tiempo real la información requerida en las condiciones y oportunidad exigidas en las normas respectivas;
5. No hacer adecuado uso del código de acceso a la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT;
6. Modificar o transformar vehículos sin la correspondiente autorización;
7. fabricar o importar vehículos, chasis, carrocerías, remolques, semiremolques que no cumplan con las especificaciones determinadas en la ficha de homologación;
8. Las demás actuaciones que constituyan violación a las normas que rigen la actividad.

CAPÍTULO IX

SANCIÓN DE SUSPENSIÓN DE LA HABILITACIÓN, PERMISO O REGISTRO

ARTÍCULO 29.- SANCIÓN DE SUSPENSIÓN. Serán sancionados con la suspensión de la habilitación, permiso o registro hasta por el término de seis (6) meses, los prestadores del servicio público de transporte terrestre automotor, fluvial, férreo, por cable, masivo, administradores de infraestructura de transporte, prestadores de servicios conexos y complementarios al transporte, Organismos de Tránsito, Centros de reconocimiento de conductores, centros de diagnóstico automotor, centros de enseñanza automovilística; importadores, ensambladores y fabricantes chasis, carrocerías y vehículos destinados al servicio público de transporte y demás prestadores de servicios de transporte o tránsito que sean sujetos de aplicación de la presente ley y que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. Cuando el sujeto sea reincidente en los términos establecidos en el artículo 37 de la presente ley.
2. Cuando dentro de la oportunidad señalada por la autoridad competente no se acrediten las condiciones administrativas, operativas y de seguridad exigidas para la prestación del servicio de transporte o la actividad que desarrollen.
3. Cuando habiendo tenido la obligación de obtener para su habilitación o funcionamiento la Certificación de conformidad y/o acreditación y dicha certificación y/o acreditación le sea suspendida por el organismo certificador o acreditador.
4. Cuando para su habilitación, el ente debió obtener autorización o reconocimiento por parte de otra autoridad y éste le ha sido suspendido.

CAPÍTULO X

SANCIÓN DE CANCELACIÓN DE LA HABILITACIÓN, PERMISO O REGISTRO

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

ARTÍCULO 30.- SANCIÓN DE CANCELACIÓN. Serán sancionados con la cancelación de la habilitación, permiso o registro, los prestadores del servicio público de transporte terrestre automotor, fluvial, férreo, por cable, masivo, administradores de infraestructura de transporte prestadores de servicios conexos y complementarios al transporte, organismos de Tránsito, centros de reconocimiento de conductores, centros de diagnóstico automotor, centros de enseñanza automovilística; importadores, ensambladores y fabricantes de chasis, carrocerías y vehículos destinados al servicio público de transporte y demás prestadores de servicios de transporte o tránsito que sean sujetos de aplicación de la presente ley y que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. Cuando los soportes que dieron origen al otorgamiento de la habilitación, permiso o registro no correspondan a la realidad.
2. Cuando pasados cinco (5) meses de habersele otorgado la habilitación de funcionamiento, permiso o registro el ente no ha iniciado las actividades respectivas.
3. Cuando se le haya suspendido la habilitación, el permiso o el registro y no se atiendan los requerimientos exigidos para mejorar las condiciones administrativas, de operación y seguridad en la prestación del servicio o en la actividad de que se trate.
4. Cuando habiéndose impuesto una sanción de suspensión, continúe operando.
5. Cuando dentro del año siguiente al levantamiento de la medida de suspensión, reincide en la comisión de las infracciones que dieron lugar a la suspensión.
6. Cuando cese temporal o permanentemente la prestación del servicio para el cual fue autorizado, habilitado o registrado, por parte del prestador, administrador u operador de los servicios.
7. Cuando en la persona jurídica titular del prestador del servicio concorra cualquiera de las causales de disolución contempladas en los estatutos o en la Ley.
8. Cuando se presenta un accidente de tránsito y hay pérdida de vidas humanas y se ha determinado por la autoridad competente que la infracción que lo origina presenta signos de agravación en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo.

TÍTULO III

DEL PROCESO SANCIONATORIO

CAPÍTULO I

ORIGEN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA

ARTÍCULO 31.- ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA. La actuación administrativa sancionatoria se adelantará:

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

- a) Como resultado de una inspección cuando el responsable no cumple con los requerimientos realizados por autoridad competente dentro del plazo establecido.
- b) Por informes de los cuerpos especializados de control de transporte.
- c) De oficio o a solicitud de parte.
- d) Por traslado de otras autoridades.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTOS

ARTÍCULO 32.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO. Cuando se tenga conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte o a cualquiera de las normas que regulan las diversas actividades, se agotará el siguiente procedimiento:

1. La autoridad competente en forma inmediata decreta la apertura de investigación mediante resolución motivada contra la que no procede recurso alguno y la cual deberá contener:

- a. Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los hechos;
- b. Fundamentos jurídicos que sustentan la apertura y desarrollo de la investigación;

1. Notificación del Acto Administrativo que ordena la apertura de la investigación, que se surtirá a través de los medios electrónicos y tecnológicos implementados en el sistema de información de que habla el artículo 11 de la presente ley.

2. Traslado por un término de diez (10) días calendario para que el presunto infractor, por escrito responda a los cargos formulados y solicite las pruebas que considere pertinentes, las que se valorarán de conformidad con las reglas de la sana crítica.

3. Práctica de las pruebas decretadas, en un término no superior a diez (10) días hábiles.

4. Decisión mediante acto administrativo motivado.

5. Notificación del acto administrativo decisorio en los mismos términos establecidos en el numeral 2 del presente artículo.

6. Traslado por el término de cinco (5) días para que el presunto infractor interponga los recursos de reposición y apelación.

PARÁGRAFO. Hasta tanto se implemente el sistema de información de que trata el artículo 10 de la presente ley y que deben implementar obligatoriamente todos los sujetos de la vigilancia, inspección y control, las notificaciones de que trata este artículo se surtirán mediante comunicación escrita que se remitirá mediante correo certificado a la dirección que aparece inscrita ante la autoridad que otorga la habilitación, permiso o registro y se efectuará al representante legal que aparezca allí registrado, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de esta comparezca para surtir la notificación personal. Si no comparece se procederá a fijar edicto por el término de cinco (5) días. Vencido el término señalado, el presunto infractor hará uso de los recursos de reposición y apelación dentro de los cinco (5) días hábiles

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

siguientes a la notificación personal o dentro de los cinco (5) días siguientes a la desfijación del edicto.

ARTÍCULO 33- PROCEDIMIENTO ABREVIADO. El proceso abreviado aquí descrito se aplicará en los siguientes casos:

- a. Cuando para la habilitación de un ente es requisito indispensable la obtención del Certificado de conformidad o de acreditación y el organismo certificador o acreditador que lo expidió, la suspende o retira como resultado de auditoria adelantada;
- b. Cuando el sujeto vigilado no haya iniciado su actividad en un plazo de CINCO (5) meses contados a partir de la fecha de habilitación, permiso o registro para su funcionamiento;
- c. Cuando se considere y existan suficientes motivos que indican que la infracción o infracciones en que incurrió el sujeto de vigilancia presenta signos de agravación en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, y hay amenaza latente de la vulneración de los derechos de los usuarios y la comunidad en general.

En cualquiera de las circunstancias aquí descritas, la autoridad competente elaborará el informe correspondiente, relatando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se sucedieron los hechos y seguirá el siguiente procedimiento:

1. Citación al representante legal o al apoderado del prestador del servicio o actividad, para que comparezca dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.
2. Notificación de la fecha de celebración de la Audiencia Pública, señalándole los cargos imputados, las pruebas, testimonios o peritazgos que se pretenden hacer valer.
3. La audiencia se surtirá en un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la notificación de cargos, disponiendo en todos los casos de la prueba de la infracción.
4. En la audiencia pública se facilitaran todos los medios para que se sancione o absuelva al inculpado bajo claros principios de oportunidad, transparencia y equidad. Si fuere posible se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado, notificando dicha decisión en estrados.
5. Cualquier actuación del representante legal o su apoderado en el desarrollo de la audiencia pública se entenderá que han sido notificados de las actuaciones allí adelantadas. El recurso de apelación deberá interponerse y sustentarse en la propia audiencia en la que se pronuncie.

El infractor podrá comparecer por sí mismo, pero si designa apoderado éste deberá ser abogado en ejercicio. El Ministerio de Transporte y el Ministerio Público podrán intervenir en los procesos, de acuerdo con las funciones que le sean propias, especialmente en defensa de los derechos de los usuarios.

Si no se presenta el citado a rendir sus descargos ni solicita pruebas que desvirtúen la comisión de la infracción, se entenderá que acepta los cargos imputados y se procederá con la imposición de la sanción respectiva.

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

ARTÍCULO 34.- ACUMULACIÓN DE PROCESOS. En desarrollo del principio de economía procesal, la autoridad competente decretará de oficio o a petición de parte la acumulación de procesos, a partir de la notificación del auto de apertura de la investigación, cuando contra un mismo ente vigilado se estuvieren adelantando varios procesos por la violación a la misma norma y siempre que no se haya proferido fallo de primera instancia.

ARTÍCULO 35.- REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN. Surtido el informe de transporte por la autoridad de control competente, si el inculpado acepta la comisión de la infracción podrá cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al informe de transporte, sin necesidad de otra actuación administrativa. Si éste es rechazado se aplicará el procedimiento descrito en el artículo 32 de la presente Ley.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 36.- COBERTURA DEL SERVICIO. Cuando se adopten las medidas preventivas de que trata la presente ley, se suspenda o cancele la habilitación de un prestador de un servicio público y no exista en el servicio otro prestador autorizado, el Ministro de Transporte podrá otorgar permisos especiales y transitorios a otros, o tomar otras medidas que considere necesarias, con el fin de garantizar la continuidad del servicio.

ARTÍCULO 37.- REINCIDENCIA. Se entenderá que hay reincidencia en la comisión de una infracción cuando en el periodo de un (1) año contado a partir de la fecha del informe de la comisión de una infracción debidamente ejecutoriada se incurra en la misma infracción o cuando incurra en la comisión de tres (3) infracciones diferentes y debidamente ejecutoriadas dentro del periodo señalado.

ARTÍCULO 38.- CADUCIDAD. La acción administrativa sancionatoria caduca en el término de tres (3) años contados a partir de la comisión de la infracción.

ARTÍCULO 39.- PRESCRIPCIÓN. La ejecución de las sanciones prescribirá en un periodo de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto que la impuso.

ARTÍCULO 40.- FUNCIÓN DE COBRO COACTIVO. La Superintendencia de Puertos y Transporte y demás autoridades que ejercen la función de vigilancia, inspección y control ostentan la facultad de cobro coactivo para hacer efectivas las sanciones pecuniarias impuestas en ejercicio de su función, la cual será ejercida de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

ARTÍCULO 41.- POLICIA JUDICIAL. Los servidores públicos que realicen funciones de vigilancia e inspección o que estén comisionados para la práctica de pruebas dentro de los procesos administrativos de carácter sancionatorio, tienen el carácter de autoridad de policía judicial. En desarrollo de sus funciones podrán solicitar los documentos que requieran sin que para ello le sea oponible reserva alguna.

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

TÍTULO V

CONTRIBUCIÓN PARA LA VIGILANCIA

ARTÍCULO 42.- CONTRIBUCIÓN PARA LA VIGILANCIA. Los recursos necesarios para cubrir los gastos que ocasione el funcionamiento y sostenimiento del sistema de información de que trata el artículo 10 de esta Ley y el funcionamiento de las entidades que ejercen funciones de vigilancia, inspección y control, se proveerán mediante la definición de una contribución para la vigilancia que pagaran anualmente, todos los vigilados.

ARTÍCULO 43.- METODO Y SISTEMA. El hecho generador está constituido por supervisión (vigilancia, inspección y control) que se ejercerá a las personas prestadoras del servicio público de transporte y a aquellas que en general realizan actividades que las hacen sujetos de aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 44.- SUJETOS ACTIVOS. Los sujetos activos son la Nación-Superintendencia de Puertos y Transporte y los municipios que tengan autorizado el servicio de transporte, de acuerdo con su competencia.

ARTÍCULO 45.- SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos de la CONTRIBUCION de vigilancia, quienes en virtud de la presente ley son sujetos de la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y las otras autoridades que ejercen dicha función.

ARTÍCULO 46.- RECAUDO. El recaudo estará a cargo de la Superintendencia de Puertos y Transporte y demás autoridades que ejercen funciones de vigilancia, inspección y Control.

ARTÍCULO 47.- MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN. El monto de la contribución para la vigilancia será fijada anualmente por el ministerio de transporte mediante resolución teniendo en cuenta el sistema y método señalado en esta ley.

ARTÍCULO 48.- SISTEMA. Para la fijación de la contribución de vigilancia se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- a. Costos que demandan la contratación de auditorias especializadas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 18 de la presente Ley.
- b. Costos que demandan la implementación del sistema de información de que trata el artículo 11 de la presente Ley
- b. Costos administrativos generados por la contratación del personal calificado para desarrollar actividades tendientes a adelantar la sustanciación de las investigaciones que adelanta la autoridad competente, y que tiene como propósito agotar el procedimiento e imponer las sanciones a que haya lugar.

ARTÍCULO 49.- MÉTODO. Una vez determinados los costos conforme al sistema de que trata el artículo anterior, la entidad correspondiente hará la distribución de los mismos entre los sujetos pasivos, para lo cual aplicará el siguiente método:

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

- a. Se establecerá el número total de los entes sujetos a la vigilancia, inspección y control de las autoridades competentes para el ejercicio de estas funciones.
- b. Los costos anuales fijados se estimarán de acuerdo al número de prestadores y las actividades de vigilancia inspección y control que se proyecten anualmente.
- c. La contribución se ajustará calculando la variación de ingresos totales anuales frente al número de ingresos esperados
- d. Las personas prestadoras del servicio público de transporte y aquellas que en general realizan actividades que las hacen sujetos de aplicación de la presente ley, pagarán el cincuenta por ciento (50%) de la contribución para la vigilancia dentro de los primeros 30 días del mes de enero del año correspondiente y el otro cincuenta por ciento (50%) en cualquier día del mes de julio del mismo año.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 50.- TRANSITORIEDAD. A los procesos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, se les haya proferido el acto administrativo de apertura de investigación continuarán con dicho procedimiento.

ARTÍCULO 51.- La presente ley rige a partir de la publicación en el diario oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en materia de sanciones.

ANDRÉS URIEL GALLEGO HENAO
Ministro de Transporte

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

PROYECTO DE LEY No.

“POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y SE ESTABLECE EL RÉGIMEN SANCIONATORIO”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La operación del transporte es un servicio público, inherente a la finalidad social del Estado y sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades competentes, en cuya prestación juega un papel decisivo la participación del sector privado. La Ley en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política, según el cual todo colombiano puede circular libremente por el territorio nacional, define este servicio como *“... una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector (fluvial, férreo, masivo y terrestre), en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica ...”*.

Las disposiciones legales que regulan el transporte, le otorgan el carácter de servicio público esencial y resalta la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de la prestación del servicio y la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones establecidas en la Constitución, la Ley y los reglamentos. El mismo ordenamiento destaca que la seguridad en el servicio, particularmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte, lo cual se ajusta al mandato constitucional contenido en los artículos 2, 11, 24, 365 y 366 que le impone al Estado el deber de proteger la vida e integridad de todas las personas residentes en Colombia.

El Estatuto de Transporte – Ley 336 de 1996 - dispone en uno de sus capítulos, que el servicio será prestado únicamente por empresas de transporte públicas o privadas, formadas por personas naturales o jurídicas legalmente constituidas y autorizadas para tal fin.

Para efectos de la ejecución del servicio, se prevé la expedición de una habilitación o licencia de funcionamiento otorgada por la autoridad competente, que será conferida al solicitante previo cumplimiento de ciertos requisitos relacionados con la organización, capacidad técnica y económica, accesibilidad, comodidad y seguridad, necesarios para garantizar a los usuarios una óptima, eficiente y continua e ininterrumpida prestación del servicio de transporte público.

El concepto del transporte que involucra sin distinción el tránsito, la infraestructura, los modos y los medios, es un concepto asociado a la movilidad del individuo como derecho fundamental y universal que no merece declaratoria constitucional, por tanto y dando alcance al objetivo del proyecto es necesario prever como sujetos de vigilancia, inspección y control de hecho, los demás actores que lo integran.

En materia de tránsito, es importante señalar que en el nuevo Código Nacional de Tránsito, -Ley 769 de 2002- se establecieron organismos de apoyo que prestan servicios al tránsito y por tal razón son sujetos de vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transporte y no cuentan con un sistema de sanciones, lo que hace necesario a través del presente proyecto de Ley

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

contemplar para estos sujetos el régimen de sanciones, y los procedimientos a aplicarse en desarrollo de la función de vigilancia, inspección y control.

La facultad de vigilancia, debe ser transversal; es decir, debe impactar a todos los prestadores del servicio de transporte, entendiéndose como el concepto amplio que involucra a todos los actores del sector, para lo cual deben establecerse indicadores específicos al servicio (Objetividad de la vigilancia) y otros propios de quien lo presta bajo la tutela sectorial (Subjetividad de la vigilancia).

Como consecuencia de ello se deberán identificar los roles y perfiles propios de cada proceso de la supervisión, que para el caso de la vigilancia serán los auditores, quienes tendrán a su cargo hacerle seguimiento a indicadores objetivos y subjetivos; especializando incluso, a quienes han de prestar este servicio.

En relación con las alarmas que genere la auditoria o proceso de vigilancia, vendrá la comprobación física frente a los documentos o a la operación misma de transporte, para lo cual el rol o perfil del funcionario o servidor a cargo será el de inspector, quien de las alarmas o hallazgos identificados por el auditor, procederá a su comprobación, para lo cual también deberá contar con una formación especializada en lo objetivo y subjetivo, con el fin de garantizar la debida comprobación de los hallazgos del auditor y consecuentemente poder dictaminar en relación con su comprobación, dictamen, que será el sustrato de trabajo de los gestores del control.

Por último, el ciclo de la supervisión termina con el control, donde la autoridad competente está facultada para imponer las sanciones a que haya lugar, previa apertura de investigación y agotamiento del proceso pertinente, o el archivo definitivo de las diligencias, sin perjuicio de conminar a los infractores a planes de mejoramiento, que de alguna manera coadyuven al crecimiento sectorial y no a su desorden sistemático.

Como titular de esta cartera ministerial, y con el ánimo de hacer eficientes los procesos de vigilancia, inspección y control que ejerce la Superintendencia de Puertos y Transporte al sector y las autoridades locales sobre sus vigilados, se pone a consideración del Honorable Congreso de la República el presente proyecto de ley para que sea discutido y aprobado por esa Corporación.

Esta iniciativa gubernamental implementa mecanismos que buscan el fortalecimiento para el ejercicio de la vigilancia, inspección y control que debe ejercer la Superintendencia de Puertos y Transporte no solo a los prestadores del Servicio Público de Transporte en sus diferentes modalidades y a los prestadores de servicios conexos y complementarios al transporte, si no que también se prevé su alcance para los demás sujetos de vigilancia de la Superintendencia como son los Organismos de Tránsito, Centros de Diagnóstico Automotor, Centros de Reconocimiento de Conductores, Centros de Enseñanza Automovilística, Importadores, ensambladores y fabricantes de carrocerías y vehículos destinados al servicio público de transporte y demás organismos de apoyo que por ley se hagan sujetos de vigilancia de ésta entidad, como elementos integrantes de la movilidad.

El proyecto ésta estructurado en seis (6) títulos, 51 artículos, de los cuales se hará una sucinta presentación a continuación.

Se ratifican los principios bajo los cuales se debe regir la actuación administrativa sancionatoria, estableciendo que en desarrollo de las funciones de Vigilancia, Inspección y Control las autoridades competentes deben

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

garantizar el debido proceso consagrado en el Ordenamiento Constitucional en su artículo 29, el principio de favorabilidad, presunción de inocencia y que su trámite se deberá adelantar con sujeción a los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política a través del cual se determina que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, además de los contenidos en el Código Contencioso Administrativo.

Se resalta en este capítulo además de los principios que deberá aplicar la superintendencia en su ejercicio, que la vigilancia, inspección y control que ésta ejerce a los sujetos vigilados es de carácter objetivo, sin perjuicio de poder examinar y comprobar operaciones de carácter contable, administrativo, financiero, jurídico, económico, aspectos administrativos, entre otros, que tengan que ver con la formación y funcionamiento del ente y solamente cuando se estuviere poniendo en riesgo la prestación del servicio. Esto es, que sin perjuicio de la competencia subjetiva asignada a otras superintendencias, la superintendencia de puertos y transporte podrá entrar a verificar algunos de los aspectos anteriormente mencionados cuando existan circunstancias que puedan poner en riesgo la prestación de un servicio ejercido por cualquiera de los sujetos vigilados.

Otros aspectos incluidos dentro de este capítulo son los relacionados con la competencia y los sujetos pasivos. Se otorga a la Superintendencia la facultad para conocer de los procesos de vigilancia, inspección y control en todo el territorio nacional, lo que implica que debe asumir el conocimiento que hoy tienen las autoridades municipales, distritales y metropolitanas en la materia, pero es necesario para el cumplimiento de este objetivo, contemplar un periodo transitorio hasta tanto, se introduzca a la Superintendencia de puertos y transporte una reestructuración acorde con esta nueva visión. El proyecto de ley por tanto condiciona la asunción de esta responsabilidad por parte de la superintendencia hasta tanto se produzca el acto administrativo que tenga como propósito adoptar una estructura administrativa coherente con sus nuevas funciones.

Respecto a los sujetos vigilados se llama la atención sobre la facultad clara que tendrá la superintendencia para tomar todas las medidas que sean necesarias con el propósito de suspender las actividades ilegales de todos aquellos prestadores de servicios irregulares, esto es sin haber sido autorizados. Considera este despacho que es una medida necesaria e indispensable que busca ofrecerle a quien legalmente ha obtenido un permiso, habilitación o autorización seguridad y certidumbre en el desarrollo de su actividad.

En los siguientes tres capítulos del proyecto se contemplan porque no decirlo, los aspectos más relevantes de la concepción de la nueva forma de ejercer las funciones atribuidas a la superintendencia de Puertos y Transporte, la cual tiende a ser más preventiva que represiva, pues con la implementación de las herramientas que se enuncian a continuación se busca es la optimización de la prestación del servicio por cada uno de los vigilados. Para el logro de este objetivo se enuncian las actividades que en desarrollo de la tarea de vigilancia podrá ejercer ante los vigilados; así mismo se contemplan las funciones de inspección y las medidas preventivas que tienen como único propósito suspender una actividad cuando se ha presentado la vulneración objetiva de cualquier disposición legal que regula determinado servicio o actividad y que como consecuencia, se está poniendo en riesgo la prestación de un servicio o afectando los intereses de los usuarios o de los mismos prestadores de servicios en caso de actividades irregulares.

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

Dentro de los mecanismos para el fortalecimiento de la vigilancia e inspección que deben ejercer la Superintendencia y demás autoridades competentes se prevé en el proyecto la implementación de herramientas por parte de los sujetos vigilados como el sistema de control de gestión y resultados, la obligación al Gobierno Nacional para que en un término de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley, adopte un sistema de información que permita tener en línea y tiempo real la información operativa, financiera y administrativa de las empresas prestadoras del servicio público de transporte y las demás que por las actividades que realizan las hacen sujetos de aplicación de las disposiciones que se consagran en este proyecto de ley, buscando eficiencia y seguridad en la información de los prestadores de esta clase de servicios y ofreciendo de ésta manera confiabilidad y transparencia a la sociedad; así mismo se faculta a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adopte formatos que consagre los aspectos que considere necesarios del sistema uniforme de contabilidad que deben aplicar los vigilados, según el monto de sus activos y con sujeción siempre a los principios de contabilidad generalmente aceptados, pretendiendo con ello optimizar la tarea de vigilancia que deben ejercer las autoridades competentes.

Se consagran facultades a las autoridades tendientes a decretar medidas de prevención, entre las que se citan, emitir órdenes que permitan la suspensión inmediata de prácticas ilegales o no autorizadas, o actividades que tiendan a establecer competencia desleal, intervenir administrativamente al ente vigilado cuando existan serios motivos que pongan en riesgo la prestación del servicio, entre otras.

Igualmente, el proyecto contempla la facultad a las autoridades competentes de decretar medidas cautelares diferenciando tres situaciones, así: I. En caso de actividades irregulares, podrá decretar la suspensión inmediata de tales actividades bajo el apremio de multas sucesivas II. En caso de accidentes de tránsito, podrá ordenar de manera inmediata la revisión progresiva del parque automotor y la realización del examen de idoneidad de todos los conductores; y III. Ordenar la inmovilización o retención de los equipos cuando no cumplan con las condiciones de homologación, o el vehículo se encuentra prestando un servicio no autorizado, entre otras.

Es de anotar que al decretar una medida preventiva o cautelar no se esta desconociendo el debido proceso, como su nombre lo indica, es una medida preventiva que surge como consecuencia de la vulneración objetiva de una norma y que tiene como propósito evitar una mayor vulneración a un derecho o la suspensión de una actividad ilícita en forma inmediata. Decretada dicha medida, vendrá el agotamiento del procedimiento descrito en el proyecto donde se tiene la oportunidad de controvertir las pruebas a que haya lugar para luego determinar la sanción a imponer cuando hubiere lugar a ello. (C- 379 de 2004).

Otro aspecto relevante de ésta iniciativa es la facultad otorgada a la superintendencia de Puertos y Transporte para contratar la realización de auditorias con firmas especializadas o con universidades públicas o privadas. Si bien es cierto la Constitución Política consagra la facultad al ejecutivo de ejercer la vigilancia, inspección y control a los servicios públicos y éste a su vez delega a la Superintendencia la Facultad de ejercer esta actividad de vigilancia, inspección y control, dentro de ésta delegación se tiene claro que es la Superintendencia la única entidad facultada para adelantar el proceso sancionatorio previsto en la norma y así mismo la única facultada para imponer una sanción cuando hubiere lugar a ello. Diferente situación ocurre respecto de las demás actuaciones previstas y que se pueden adelantar en el ejercicio de la vigilancia e inspección las cuales son delegables en otros entes o personas

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

especializadas, como es el caso de las auditorias previstas en el proyecto de ley.

En el capítulo relativo al régimen sancionatorio, en primera instancia se están estableciendo unos criterios para que el juzgador tenga en cuenta al momento de entrar a determinar la sanción a imponer, esto es dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la intencionalidad, la falta de prudencia o diligencia si el sujeto es o no reincidente en la realización de la conducta, aspectos que permiten medir la prudencia o diligencia desplegada por el investigado. Es de aclarar que nada tiene que ver el orden en que se encuentran descritas las diferentes sanciones en el respectivo artículo, pues como se ha expuesto, los criterios de gradualidad son la herramienta que le permitirá al juzgador determinar si la conducta desplegada por el vigilado amerita una sanción de amonestación que se considera es la menos grave o si de acuerdo a las pruebas y análisis de los criterios de gradualidad conlleva a la imposición de la sanción de cancelación de un permiso o registro.

Para los prestadores del servicio público de transporte en los diferentes modos, esto es carretero, fluvial y férreo se están contemplando las infracciones en forma transversal, pues son los mismos requisitos para la prestación del servicio de transporte. Para esta misma actividad se prevé tres gradualidades, y es de anotar que se está optando por realizar la gradualidad de la infracción desde la norma para limitar la discrecionalidad que pueda tener el juzgador, dejándole si al juzgador la facultad de dosificar la infracción al momento de determinar la clase de sanción a imponer. La gradualidad de la sanción se contempla entonces al determinar el monto de la multa a imponer, en esta actividad se ha determinado que aquellas infracciones que tiene que ver con la seguridad conllevan mayor responsabilidad y por tanto se clasifican como las más graves.

Para los demás sujetos pasivos se realizan dos gradualidades, que igualmente se están determinando con el monto de la multa a imponer.

Es de anotar así mismo que diferente a las anteriores disposiciones que consagran el régimen sancionatorio, se optó en esta iniciativa, por unificar las multas en SMLDV. Obviamente contemplando unas multas superiores a las contempladas en el código nacional de tránsito pues se debe tener en cuenta que aquí el régimen sancionatorio está destinado a prestadores de servicios públicos lo que implica o lleva inmerso una mayor responsabilidad, pues el estado les está delegando una función para que en su nombre sea realizada, mientras que en el código nacional de tránsito se contemplan las sanciones a imponer a un ciudadano común y corriente.

Respecto a las conductas tipificadas como infracciones para cada uno de los sujetos de vigilancia, es de advertir que cuando al final de cada capítulo se enuncia la infracción *“Las demás conductas que constituyan infracciones a las normas que las rigen”*, no implica que la autoridad competente pueda a su arbitrio elevar a infracción cualquier conducta. La norma sustantiva que regula cada una de las actividades ejercidas por cada sujeto pasivo, previamente ha establecido los deberes y obligaciones de cada uno de ellos en el ejercicio de sus funciones, por tanto la expresión descrita hace alusión a una conducta desplegada por el vigilado que se aparta de sus obligaciones y deberes y que no quedo descrita en las infracciones contempladas en la presente ley.

Así mismo, el proyecto implementa dos clases de procedimientos para la aplicación del régimen sancionatorio.

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

- Un procedimiento abreviado el cual se desarrollará en audiencia pública y se adelantará cuando para la habilitación de funcionamiento de un ente, es requisito indispensable la obtención del Certificado de Conformidad y el Organismo Certificador que lo expidió, procede a la desertificación como resultado de auditoria adelantada; cuando la entidad no haya iniciado su actividad en un plazo de cinco (5) meses contados a partir de la fecha de habilitación para su funcionamiento y; cuando se considere y existan suficientes motivos que indican que la infracción o infracciones en que incurrió el sujeto de vigilancia presenta signos de agravación en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, y hay amenaza latente de la vulneración de los derechos de los usuarios y la comunidad en general. Como se puede observar, la norma contempla los casos expresos en los que se aplicará el procedimiento abreviado, lo que implica que en forma excepcional se dejará de aplicar el proceso ordinario.

- Un procedimiento ordinario para los demás casos.

Para contrarrestar uno de los grandes inconvenientes que actualmente se presentan en los procesos que se adelantan en la Superintendencia, es el referente al proceso de notificación, para lo cual se esta contemplando la obligatoriedad de surtir las notificaciones a través de los medios electrónicos y tecnológicos una vez se adopte e implemente por parte del Gobierno Nacional el sistema de información que permita contar con la información en línea de los sujetos vigilados.

Hoy, la ley vigente consagra procedimientos largos y engorrosos que dificultan la labor de control, lo que se traduce en autoridades inoperantes generando impunidad en las violaciones a las normas por parte de los prestadores del servicio.

Dos medidas que igualmente contribuirán a dar agilidad a las tareas de supervisión, es la acumulación de procesos que se esta contemplando en el artículo 34 del proyecto, pues con ello se persigue en aplicación del principio de economía procesal, facultar a la Superintendencia decretar de oficio la acumulación de aquellos procesos que se siguen contra el mismo ente vigilado por la comisión de diferentes infracciones, siempre y cuando no se haya proferido fallo en primera instancia y una segunda medida, es la que contempla la posibilidad de pagar el 50% del valor de la infracción de transporte, si el ciudadano acepta la comisión de esta y realiza el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la imposición de la infracción, evitando mover el aparato estatal para iniciar el respectivo proceso administrativo; ésta medida igualmente evita al ciudadano el agotamiento de todo un proceso para cumplir con una obligación que previamente ha reconocido tener. Para la aplicación de esta medida igualmente es necesario determinar el monto de la multa a imponer, por tanto en el capítulo respectivo se deja en forma concreta el monto en SMLDV.

Con el objeto de contar con recursos para implementar todas aquellas herramientas que se hacen necesarias para desarrollar una tarea de vigilancia, inspección y control que efectivamente permita cumplir con la razón de ser de esta delegación hecha a la Superintendencia de Puertos y Transporte, el proyecto crea la tasa de vigilancia la cual deberá ser sufragada por los sujetos vigilados, tal como así esta previsto en las legislaciones que aplican en los demás sectores.

En términos generales se resaltan estos aspectos que se consideran trascendentales en la propuesta que contiene el proyecto del régimen sancionatorio para el sector y que busca optimizar la prestación de los

Proyecto de Ley No.

Por la cual se dictan disposiciones para el ejercicio de la función de Vigilancia, Inspección y Control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se establece el régimen sancionatorio.

diferentes servicios desarrollados por cada uno de los sujetos de vigilancia, inspección y control.

ANDRÉS URIEL GALLEGGO HENAO
Ministro de Transporte